

**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN LAS MUJERES DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS

EVIDENCIAS DE ECUADOR, MÉXICO,
CAMERÚN E INDONESIA



**RESILIENCE
FUND**

Supporting community
responses to organized crime

Faith Ngum | Radha Barooah

OCTUBRE DE 2023

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las investigadoras locales Sandra Teran, Patricia Mayorga y Flora Nina su apoyo en la recopilación de datos. También agradecemos a Ian Tennant, Tuesday Reitano y Siria Gastélum sus valiosos comentarios, y a los miembros del personal de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC) Lina Asprilla y Patrick Gnonsekan por documentar los diálogos. Gracias también a la Plataforma Comunitaria del Fondo Resiliencia, en particular a Diana Siller y Nukila Evanty, por el apoyo en la validación y la formulación de recomendaciones. Por último, queremos agradecer a los equipos de publicación y comunicación de GI-TOC. Este material ha sido financiado por UK Aid del Gobierno del Reino Unido; sin embargo, las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno del Reino Unido.



Partnership | Progress | Prosperity

ACERCA DE LOS AUTORES

Faith Ngum es especialista en programas de género e investigadora con experiencia en género, tenencia de la tierra y cambio climático. Es coautora de varios artículos reseñados en revistas especializadas, uno de los cuales se presentó en la CoP26 de Glasgow. Posee un máster avanzado magna cum laude en gobernanza y desarrollo por el Institute of Development Policy of the University of Antwerp (Instituto de Política de Desarrollo de la Universidad de Amberes) (Bélgica).

Radha Barooah es la coordinadora regional para Asia Meridional y Sudoriental del Fondo Resiliencia de GI-TOC. Su trabajo consiste en coordinar y apoyar iniciativas locales de la sociedad civil contra el impacto del crimen organizado transnacional en Asia. Publicó un informe de investigación sobre la gobernanza criminal en Uttar Pradesh Occidental (India). Radha tiene un máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Leiden University (Universidad de Leiden).

© 2023 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta publicación, en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización por escrito de la Iniciativa Global.

Fotografía de la portada: © *Franklin Jacome a través de Getty Images*

Dirija sus consultas a:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France 23
Geneva, CH-1202
Switzerland
www.globalinitiative.net

CONTENIDO

- Resumen ejecutivo..... 2**
 - Metodología.....3
 - Recomendaciones principales.....3
- Introducción 4**
 - Perspectivas globales sobre la protección del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la igualdad de género5
 - Crímenes organizados transnacionales medioambientales y delitos contra el medio ambiente.....6
 - Resumen del estudio de caso: Impacto de género de los delitos contra el medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.....8
- Resiliencia de las mujeres ante los delitos contra el medio ambiente, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad 10**
 - Amazonia ecuatoriana..... 10
 - Región de la Sierra Tarahumara, México 15
 - Área clave de biodiversidad de Yabassi, Camerún..... 18
 - Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra, Indonesia 21
- Conclusiones y recomendaciones 25**
- Referencias..... 29



DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN: UNA DÉCADA DE ANÁLISIS, DISRUPCIÓN Y RESILIENCIA

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC) se fundó en 2013. Su visión era impulsar un enfoque estratégico mundial para hacer frente al crimen organizado mediante el fortalecimiento del compromiso político para hacer frente al problema, la creación de una base de datos analíticos sobre el crimen organizado, la desarticulación de las economías delictivas y el desarrollo de redes de resiliencia en las comunidades afectadas. Diez años después, la amenaza del crimen organizado es mayor que nunca y es fundamental que sigamos actuando mediante la creación de una respuesta mundial coordinada para hacer frente al problema.



RESUMEN EJECUTIVO

Lo que constituye un delito medioambiental ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Sin embargo, tanto la degradación medioambiental inducida por el hombre como la pérdida de biodiversidad son pertinentes. Las comunidades locales, en su mayoría grupos indígenas, que viven en torno a zonas biodiversas que comprenden bosques, montañas y ecosistemas marinos pueden encontrarse entre las primeras afectadas. La presencia de actividades de extracción ilegales, ya sean mineras o madereras, atrae a hombres de fuera de estas zonas y «masculiniza» de hecho estos territorios. Esto altera la vida cotidiana y amenaza la seguridad de las mujeres, que a menudo tienen que adentrarse en los bosques para realizar actividades domésticas. El impacto varía de una comunidad a otra y está vinculado a los roles de género y al patriarcado, y a veces incluye violencia física.

Este informe presenta estudios de caso de cuatro ecosistemas forestales: los bosques de Arajuno en la Amazonia ecuatoriana, los bosques de la Sierra Tarahumara en México, los bosques de Yabassi en Camerún y las selvas tropicales del norte de Sumatra en Indonesia. Los resultados muestran que, aunque las comunidades indígenas locales se movilizan para defender sus territorios contra las operaciones extractivas y los delitos medioambientales percibidos, las normas de género y el patriarcado limitan la voz y la participación de las mujeres. Sin embargo, la participación de las mujeres en los movimientos de resistencia ha aumentado gradualmente, sobre todo contra las concesiones estatales a gran escala, y muchas se han convertido en las principales defensoras del medio ambiente en sus comunidades. Su motivación para expresar sus puntos de vista y desafiar las narrativas dominantes contra las comunidades indígenas a través de diversos actos de solidaridad está firmemente arraigada en su deseo de proteger sus modos de vida. Sus estrategias de resiliencia son similares, pero específicas para cada contexto y matizadas en las comunidades de los cuatro ecosistemas forestales analizados en este informe.



En Indonesia, las empresas multinacionales incumplen las leyes sobre desbroce de tierras, lo que contribuye a la aparición de devastadores incendios forestales.
© Anton Raharjo/Anadolu Agency a través de Getty Images

Metodología

Este informe utiliza una metodología de investigación cualitativa con análisis de contenido de documentos y cuestionarios/entrevistas semiestructurados con personas de comunidades de la Amazonia ecuatoriana, la región de la Sierra Tarahumara de México, el Área Clave de Biodiversidad de Yabassi en Camerún y el Patrimonio de la Selva Tropical de Sumatra en Indonesia. Las comunidades de estos lugares de estudio son diversos grupos indígenas étnicos y mixtos, unidos por sus vínculos históricos con un ecosistema forestal específico.

Estos cuatro casos se seleccionaron como parte de un programa más amplio que examina la resiliencia comunitaria y se centra en las mujeres en los ecosistemas forestales. La falta de datos desglosados por género, incluso sobre distinciones binarias entre hombres y mujeres, limita nuestro resumen a centrarnos en las perspectivas de las mujeres, en contraposición a otras identidades de género.

En junio de 2023 se recopilaron datos primarios de 36 mujeres y 36 hombres en los cuatro lugares del estudio de caso. Los cuestionarios y las entrevistas se realizaron en español (en Ecuador y México), bahasa (en Indonesia) y francés (en Camerún) por asistentes de investigación nacionales radicados en cada uno de los países del estudio de caso. Las respuestas se analizaron junto con datos secundarios obtenidos del Índice global de crimen organizado y una revisión bibliográfica de documentos de políticas internacionales, libros y artículos de revistas, documentos de políticas de Gobiernos nacionales, informes y otros textos publicados e inéditos sobre el género, los delitos contra el medio ambiente, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la legislación/gobernanza forestal.

Recomendaciones principales

- Recopilar datos desglosados por género sobre los delitos contra el medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la degradación medioambiental, e integrarlos en la programación.
- Descolonizar los conceptos de justicia medioambiental y distribución equitativa de los recursos a la hora de diseñar políticas para la protección del medio ambiente y la resiliencia de las comunidades indígenas.
- Apoyar actividades de empoderamiento socioeconómico de las mujeres para aumentar su independencia financiera a través del desarrollo sostenible. Promover la creación de actividades generadoras de ingresos en torno a diversos recursos forestales, incluida la conservación de plantas y los métodos indígenas de permacultura. Estas deben ser actividades centrales de la integración de la perspectiva de género.
- Crear espacios seguros para que las mujeres compartan sus experiencias y fomentar la colaboración entre grupos de mujeres. Proporcionar redes de apoyo para salvar la distancia entre las comunidades locales y los funcionarios municipales/regionales corruptos.
- Ampliar la definición de «delitos medioambientales» para incluir todas las actividades que provoquen la destrucción continua del medio ambiente (incluidos el vertido de residuos y el desbroce de tierras) y para las que no se haya obtenido el consentimiento informado previo de las poblaciones indígenas y locales. Reforzar las medidas de rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión independientes y seguros.



INTRODUCCIÓN

El crimen organizado está provocando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas forestales de todo el mundo.¹ El impacto de la degradación medioambiental en las comunidades indígenas que dependen de los bosques es ampliamente conocido y reconocido en los discursos internacionales sobre desarrollo y protección del medio ambiente. Sin embargo, el impacto de género de los delitos contra el medio ambiente, aunque forma parte de la conversación más amplia sobre justicia medioambiental y pérdida de biodiversidad, se limita a los marcos internacionales de conservación y cambio climático.

Como parte del trabajo más amplio del Fondo Resiliencia sobre la resiliencia de las mujeres ante el crimen organizado, este informe exploratorio sobre políticas desentrañará las formas en que las mujeres luchan, se adaptan y responden a los impactos de la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad causadas por la explotación ilegal de las regiones forestales y sus alrededores, especialmente en hábitats rurales e indígenas.² Las mujeres que viven en comunidades indígenas que tienen vínculos socioculturales y económicos con su entorno natural se ven cada vez más afectadas por la creciente presencia de economías de extracción ilegal. Los recursos forestales significan cosas diferentes para hombres y mujeres, dependiendo de sus papeles, prioridades e intereses a la hora de satisfacer las necesidades del hogar y las expectativas sociales. La forma en que las mujeres perciben, afrontan y responden a los delitos medioambientales y a la pérdida de biodiversidad está determinada por la alteración de los roles tradicionales de género y la dinámica familiar. Los roles de género tienden a conformar estructuras de poder que también determinan el acceso a los derechos y a la capacidad de acción, incluida la participación política de las mujeres.³

Se presentará un análisis cualitativo de lo anterior en cuatro estudios de caso de bosques y comunidades indígenas que viven en y alrededor de:

- Amazonia ecuatoriana, Ecuador
- Sierra Tarahumara, México
- Área clave de biodiversidad de Yabassi, Camerún
- Patrimonio de la selva tropical de Sumatra, Indonesia

Estudios recientes sobre el replanteamiento de la resiliencia ante el crimen organizado muestran que las mujeres de todo el mundo están reclamando su voz y su capacidad de acción, participando en diversas respuestas comunitarias al crimen organizado, a pesar de los riesgos que corren sus vidas.⁴ Sin embargo, al igual que ocurre con la trata de personas, las dimensiones de género de los delitos contra el medio ambiente no están muy claras.⁵ Por lo tanto, es necesario comprender las estrategias de resiliencia de las mujeres que están surgiendo como defensoras del medio ambiente frente a los grupos delictivos, el acaparamiento de tierras, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del suelo y el agua como consecuencia de las industrias extractivas y la agroindustria.

Perspectivas globales sobre la protección del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la igualdad de género

En diciembre de 2022, en la 15.ª Conferencia de las Partes (CoP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, representantes de 188 países adoptaron el Marco Global de Biodiversidad (Global Biodiversity Framework, GBF) de Kunming-Montreal para la acción, estableciendo cuatro objetivos que deben alcanzarse en 2050 y 23 metas que deben lograrse en 2030.⁶ El marco de biodiversidad para después de 2020, como también se le conoce, aborda la alarmante pérdida de biodiversidad causada por la explotación humana de los recursos naturales.⁷ El marco está reconocido como un paso importante en la protección de la biodiversidad, ya que utiliza un enfoque de derechos humanos para abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático inducidos por el hombre.⁸ Uno de los principales objetivos del GBF, conocido como 30x30, es conservar y ampliar los ecosistemas naturales terrestres y acuáticos del mundo en un 30 % para el 2030. Un importante punto de controversia ha sido si los territorios indígenas pueden ser una categoría de conservación separada de las áreas protegidas. Los territorios indígenas no se incluyeron como categoría separada de conservación, pero se respetarán los derechos indígenas en los esfuerzos de conservación.⁹



El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la CoP15 en 2022, hace hincapié en el respeto de los derechos indígenas en los esfuerzos de conservación. © Yu Ruidong/China News Service a través de Getty Images

La meta 23 del GBF se centra en la igualdad de género, lo que supone un paso adelante respecto a las anteriores metas de Aichi establecidas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU para 2011-2020. El marco del GBF posterior a 2020 incluye un plan de acción de género para aumentar los datos de referencia desglosados por sexo sobre la conservación, el uso y la propiedad de los recursos de la tierra, y la participación en los procesos de toma de decisiones.¹⁰

En su esencia, el discurso global sobre la protección y la conservación del medio ambiente promueve la «integración de la perspectiva de género» en las políticas y marcos medioambientales a escala nacional, regional e internacional, como el GBF, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este enfoque temático se extiende a acuerdos regionales como la Política de Género de la Unión Africana, el Plan de Acción Regional sobre el Acceso de las Mujeres a la Tierra y los Recursos Forestales en América Latina y el Caribe, y el Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en Asia y el Pacífico, todos los cuales promueven la integración de las consideraciones de género en los programas y políticas, incluidas las decisiones relacionadas con el medio ambiente.

Los instrumentos internacionales y regionales reconocen que la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático tienen repercusiones diferentes en las mujeres y los hombres debido a sus distintos roles, responsabilidades y relaciones con los recursos naturales.¹¹ Según los informes, el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, que constituyen más del 40 % de la mano de obra agrícola y son responsables del 60 %-80 % de la producción mundial de alimentos.¹² Esto las hace especialmente vulnerables a las catástrofes medioambientales, ya que sus medios de vida y expectativas sociales se ven directamente afectadas. Los refugios y campamentos de emergencia se convierten en terreno abonado para el tráfico y la explotación de mujeres y niños.¹³ En muchas regiones se han registrado matrimonios infantiles forzados, al agotarse los ingresos familiares procedentes de la agricultura tras una crisis medioambiental.¹⁴

Crímenes organizados transnacionales medioambientales y delitos contra el medio ambiente

El crimen organizado transnacional contra el medio ambiente es una de las principales causas de la deforestación, contaminación del suelo y el agua, la violencia, la pérdida de biodiversidad y la degradación general del medio ambiente en todo el mundo.¹⁵ Los grupos de delincuencia organizada han aprovechado la escasez mundial de recursos naturales para diversificar sus operaciones a partir de otras economías delictivas, como el tráfico de drogas, personas y armas.¹⁶ Los delitos medioambientales transnacionales requieren amplios recursos y complejos sistemas logísticos para extraer y transportar bienes naturales como madera, minerales, petróleo, fauna y flora silvestres. Utilizan las infraestructuras ilegales existentes, como las rutas de contrabando, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionarios locales, para cometer delitos medioambientales transnacionales.¹⁷

Por otro lado, los delitos contra el medio ambiente perpetrados por actores estatales o privados suelen valerse de la corrupción, la política y los poderosos grupos de presión para obtener licencias y burlar los marcos legales de protección ambiental y los derechos indígenas, como las evaluaciones de impacto y el consentimiento previo informado de las comunidades indígenas. Cabe señalar que los marcos de justicia ambiental desarrollados sobre la base de conceptos coloniales, como la distribución equitativa de los recursos, la justicia procesal, la participación política y la gestión ambiental, excluyen los conocimientos, valores y culturas de los pueblos indígenas (y socialmente marginados).¹⁸

Las comunidades indígenas son las primeras en denunciar y desafiar las transgresiones de las compañías privadas y estatales que dañan el medio ambiente, su gente y los ecosistemas naturales. Al hacerlo, están desafiando no solo las transgresiones legales, sino también los conceptos del capitalismo global que impulsan un crecimiento económico en el que la ecología está al servicio de la economía. En un principio, las concesiones de tierras para las industrias extractivas, incluidos los agronegocios y los monocultivos, han facilitado una serie de violaciones de los derechos humanos, operaciones extractivas ilegales e ilícitas, tráfico de especies silvestres y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en los ecosistemas circundantes.¹⁹ Sin embargo, un hecho positivo es el creciente número de cortes y tribunales medioambientales en todo el mundo, lo que indica la prevalencia de las cuestiones medioambientales y el cambio del discurso en torno a ellas.²⁰

Las actividades ilegales que dañan el medio ambiente son amplias y complejas, con una implicación estatal a varios niveles y en diferentes grados.²¹ Tales actividades pueden ser cometidas a pequeña escala por entidades privadas para el consumo nacional. No siempre pueden llegar a ser delitos medioambientales transnacionales que impliquen cadenas de suministro transnacionales ilícitas. Las definiciones y los marcos jurídicos de los delitos contra el medio ambiente cambian en función de la naturaleza de lo que es perjudicial y de lo que se considera o no ilegal a escala internacional, nacional y regional.²²

DEFINICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO MEDIOAMBIENTAL



No todos los delitos contra el medio ambiente son delitos organizados contra este. La implicación de grupos del crimen organizado en las cadenas de suministro de recursos naturales como la madera, el petróleo y los minerales, la flora y la fauna, así como el vertido de residuos y el comercio de sustancias químicas prohibidas, sustentan la mayoría de los marcos conceptuales sobre delitos contra el medio ambiente.

El crimen organizado medioambiental tiende a converger con las economías ilícitas de la trata de personas, el narcotráfico y el blanqueo de dinero, y puede ser distinta de la tala, la pesca o la caza ilegales.



Las comunidades locales o indígenas suelen ser reclutadas a la fuerza para trabajar como mineros, cazadores y transportistas, y pueden ser víctimas directas de la violencia, característica de los territorios con gobernanza criminal.

Sin embargo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento de tierras, la contaminación del suelo y el agua, la sobrepesca y el vertido de residuos no solo son cometidos por organizaciones delictivas, sino también por actores privados (particulares, el Estado y empresas) que tienen un impacto acumulativo igual o mayor.



Los marcos y normativas de protección medioambiental para las industrias extractivas varían en todo el mundo. Se basan en visiones antropocéntricas modernas del victimismo y los daños contra el medio ambiente que pasan por alto los daños a las formas de vida no humanas. La falta de consenso sobre el concepto de delito medioambiental entre las distintas disciplinas y partes interesadas ha sido un reto importante a la hora de responder a este problema. Aunque los retos conceptuales que plantea la terminología actual quedan fuera del alcance de este informe, se destacan las perspectivas de las comunidades indígenas, y de las mujeres en particular.

Este informe se refiere a los delitos contra el medio ambiente desde la perspectiva de las comunidades locales, especialmente de las mujeres, donde las fronteras entre las grandes organizaciones delictivas y las operaciones extractivas «legales» son difusas en cuanto a su impacto sobre el medio ambiente y el tejido sociocultural y económico de las sociedades indígenas. Las comunidades entrevistadas identificaron la tala ilegal, la minería, el vertido de residuos, el tráfico de especies silvestres y la pesca INDNR como delitos medioambientales que se producen en sus ecosistemas forestales. La presencia de grupos delictivos aumenta la competencia por las tierras cultivables, marginando aún más a estas comunidades, que son desplazadas a la fuerza de sus tierras ancestrales o reclutadas como actrices de bajo nivel en las florecientes industrias de operaciones lícitas e ilícitas.

El discurso global sobre el cambio climático viene determinando desde hace tiempo que las personas marginadas, especialmente de las comunidades indígenas, son desproporcionadamente vulnerables.²³ Esto también es importante para comprender los impactos de género y las respuestas a los delitos ambientales y la pérdida de biodiversidad que experimentan las comunidades indígenas que viven cerca de zonas biodiversas.

Resumen del estudio de caso: Impacto de género de los delitos contra el medio ambiente y la pérdida de biodiversidad

Las presiones del cambio climático provocadas por los delitos contra el medio ambiente y las industrias extractivas están empujando a las mujeres a los márgenes de la gestión medioambiental, donde se espera que cumplan sus funciones designadas de «crianza» del hogar y los miembros de la familia. El género, en el sentido binario normativo de hombre y mujer, ha determinado durante mucho tiempo las funciones y responsabilidades socioeconómicas en todas las sociedades. Las relaciones de género se sustentan en los roles de género, las expectativas de comportamiento de hombres y mujeres en entornos institucionales como la familia y el lugar de trabajo.²⁴ Se trata de «las expectativas socioculturales que se aplican a las personas en función de su asignación a una categoría de sexo (masculino o femenino)».²⁵



Miembros de una delegación de líderes de comunidades indígenas de América Latina e Indonesia, de la campaña Guardianes del Bosque, se manifiestan contra la deforestación. © Tolga Akmen/AFP a través de Getty Images

Los roles de género en el sentido binario son sistémicos, arraigados en los comportamientos colectivos de los dos sexos y culturalmente diferenciados como masculino y femenino.²⁶ Los roles de género varían según factores como la etnia, la ubicación, los ingresos y el estatus, la raza y el parentesco. Estas intersecciones distinguen y crean vulnerabilidades específicas y capacidades de resiliencia tanto para hombres como para mujeres, especialmente en entornos indígenas y rurales, para responder a la degradación ambiental, los conflictos y la delincuencia inducidos por el hombre.

Las comunidades indígenas de todo el mundo son ampliamente reconocidas por su papel en la conservación de las plantas autóctonas. El rol de las mujeres en la conservación de las plantas se remonta a los orígenes de la propia agricultura.²⁷ Las relaciones de género dentro de las comunidades indígenas han implicado a las mujeres en la limpieza, el cuidado de niños y ancianos, la recogida de agua y leña, la cría de animales pequeños y la gestión de plantas a través de la agricultura de subsistencia y los huertos domésticos, que también contienen plantas culinarias y medicinales autóctonas en peligro de extinción. Más del 90 % de las mujeres de las comunidades entrevistadas para este estudio participan en la gestión de plantas a través de huertos y pequeñas granjas, como las *chacras* en Ecuador y las granjas en Camerún.²⁸ También recolectan, procesan y venden productos forestales no leñosos (PFNL), como nueces, hojas, miel y resinas.

Los hombres, por su parte, tienen una capacidad de acción desproporcionada con derechos sobre los recursos, poder económico/financiero, actividades generadoras de ingresos y participación política y económica. Las principales actividades económicas en las zonas forestales de estas comunidades incluyen la agricultura comercial en zonas forestales remotas, la caza, la pesca, los trabajos de construcción, la carpintería, el pequeño comercio, la venta de productos madereros y el trabajo remunerado en concesiones mineras, madereras o agroindustriales. Estas actividades, que son las principales fuentes de sustento, están totalmente dominadas por los hombres, siguiendo estructuras patriarcales tradicionales.

Además, los hombres suelen ser quienes toman las decisiones en el hogar. Organizan, participan y representan al hogar en las reuniones comunitarias (*mingas* en Chilly Urku, Ecuador) y otras esferas públicas relacionadas con la gestión de los recursos forestales. A pesar de su participación en las prácticas de conservación de las plantas, enmascaradas como tareas cotidianas, las mujeres son invisibles cuando se trata del impacto de la degradación medioambiental en su salud, capacidad de acción, gestión del hogar y supervivencia en general.²⁹ En la Amazonia ecuatoriana, la región de la Sierra Tarahumara y los bosques tropicales de Sumatra y Yabassi, los efectos de la minería ilegal y la gestión inadecuada de los residuos en la contaminación del suelo y el agua se han asociado al deterioro de la salud humana, aumentando las exigencias de los cuidados domésticos de las mujeres, que a su vez no son inmunes.

Las concesiones madereras y mineras han llevado a numerosos hombres no indígenas a territorios indígenas de Ecuador, México, Indonesia y Camerún. Las actividades forestales se masculinizan cada vez más, como lo demuestran el acoso y las agresiones sexuales a las mujeres locales en el bosque, a menudo mientras realizan las actividades domésticas esperadas, como recoger leña o agua.³⁰ Reforzando los roles de género, los hombres de la comunidad no se libran, sino que son explotados por su mano de obra y su fuerza muscular. Mientras tanto, mujeres y niñas son sometidas a prostitución forzada en torno a explotaciones mineras y de madera ilegales, de mediana y gran escala.

La inseguridad alimentaria es una de las principales preocupaciones de las mujeres. El agotamiento de las tierras agrícolas, la deforestación y la contaminación de los ríos han provocado la escasez de pescado y carne de animales silvestres, que son fuentes tradicionales de proteínas. El incumplimiento de sus funciones ha desembocado en violencia doméstica, como denuncian las mujeres indígenas ecuatorianas.³¹ Además, la participación política de las mujeres, y más aún de las mujeres indígenas, sigue siendo baja, independientemente de los movimientos. Las mujeres de las regiones estudiadas están excluidas en gran medida de los planes de compensación de tierras, ya que solo poseen tierras a través de sus familiares varones.³²



RESILIENCIA DE LAS MUJERES ANTE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La resiliencia comunitaria, tal y como la define el Fondo Resiliencia, es la capacidad de una comunidad para adaptarse y responder a las amenazas e impactos del crimen organizado. La resiliencia de las mujeres en el contexto de delitos medioambientales específicos viene determinada por sus esfuerzos colectivos para responder al impacto desproporcionado de la degradación medioambiental que sufren como consecuencia de las estructuras patriarcales tradicionales que perpetúan las normas de género.

La resiliencia de las mujeres ante los delitos contra el medio ambiente y la pérdida de biodiversidad se presentará a través de cuatro estudios de caso. Cada estudio de caso proporcionará el contexto del delito medioambiental, cómo afecta a las mujeres indígenas y cómo han respondido las comunidades. Además de una revisión bibliográfica, estos estudios de caso se basan en entrevistas con las comunidades indígenas quichua y shuar de la Amazonia ecuatoriana (nueve mujeres y 12 hombres); los rarámuris y ódames de la región de la Sierra Tarahumara (10 mujeres y cinco hombres); los bassas, betis, bandems y bona ba'as de la región forestal de Yabassi (nueve mujeres y 13 hombres); y la comunidad indígena batak toba de Sumatra (ocho mujeres y seis hombres).³³

Amazonia ecuatoriana

Situado en la provincia de Pastaza, Ecuador, el cantón Arajuno está formado por montañas escarpadas ricas en biodiversidad y fuente de sustento para siete comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana, entre ellas los quichuas y los shuars.³⁴ Estas comunidades han dependido durante mucho tiempo de los bosques para obtener alimentos, materiales de construcción, agua potable, leña, materiales artesanales, medicinas naturales y tierras cultivables para la agricultura (*ajas* y *chacras*).³⁵ Los miembros de la comunidad entrevistados para este estudio pertenecían principalmente a la comunidad Chilly Urku, un grupo quichua.

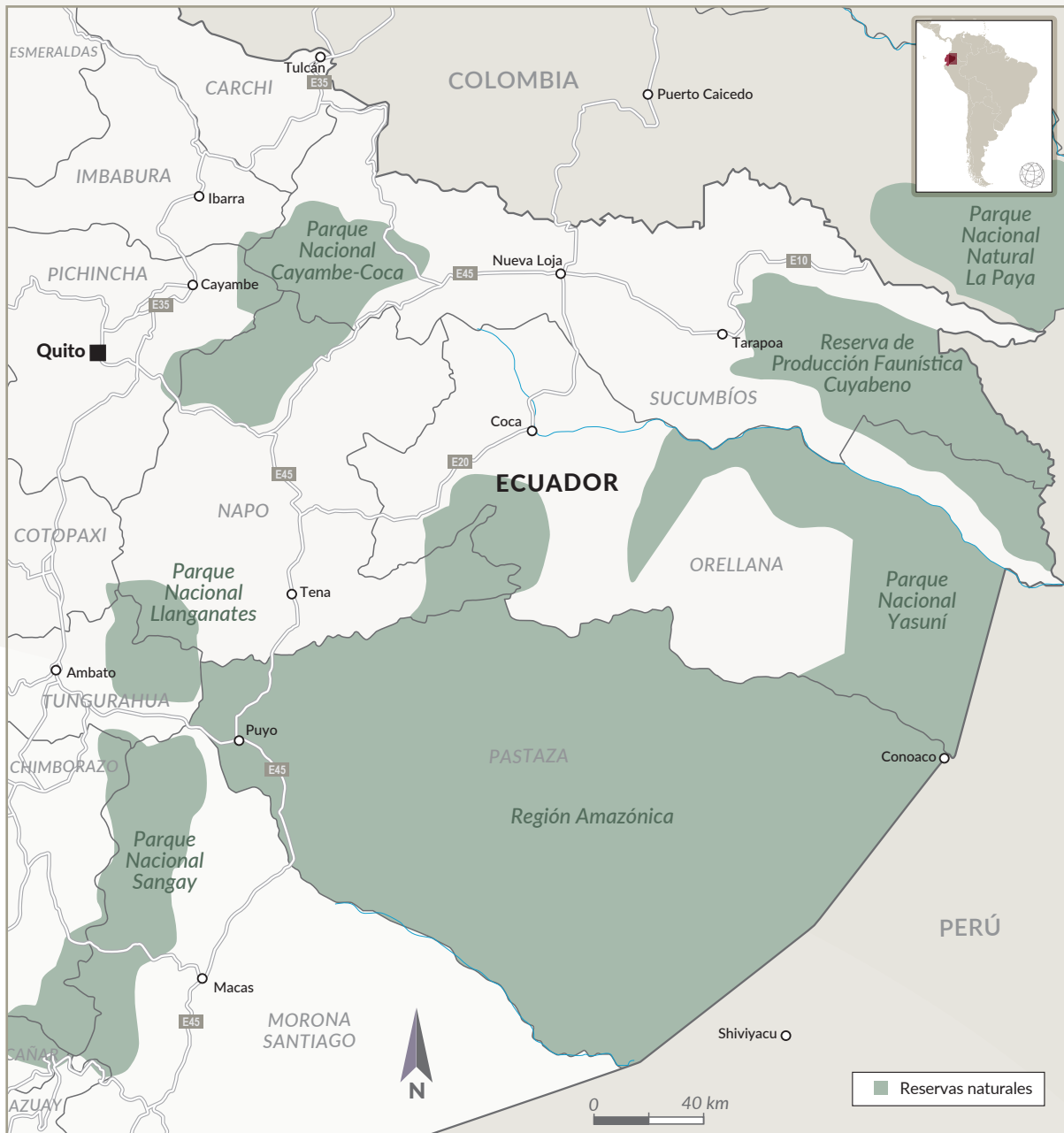


FIGURA 1 Localización de los bosques de Arajuño en la Amazonia ecuatoriana.

La relación entre las comunidades indígenas ecuatorianas y su tierra, que durante mucho tiempo ha sustentado sus identidades étnicas y de género, se ha visto condicionada por el desarrollo y la extracción, ya que los Gobiernos nacionales se centraron en la Amazonia y su potencial petrolífero desde la década de 1980 hasta la primera década del 2000.³⁶ En 2009, facciones de la comunidad Sápára, en su mayoría ubicadas cerca de la frontera peruana, se unieron para formar la Nación Sápára del Ecuador (NASE) con el fin de resolver las disputas territoriales indígenas surgidas a raíz de las concesiones petroleras en sus tierras ancestrales. Una vez constituida, la NASE se dividió en facciones a favor y en contra del petróleo.³⁷

La selva amazónica de Ecuador está siendo explotada por la caza ilegal, la caza furtiva de fauna exótica, la pesca INDNR en sus sistemas fluviales, la tala ilegal de especies protegidas como la caoba y la minería ilegal. Estas actividades constituyen la mayoría de los delitos contra el medio ambiente en la selva.

Dado que los territorios forestales se han politizado cada vez más, los entrevistados acusaron a los *mestizos* (europeos no indígenas o personas de ascendencia mixta), a las compañías transnacionales y a otras comunidades vecinas de actuar en confabulación con funcionarios gubernamentales y militares corruptos para llevar a cabo operaciones extractivas ilegales para el consumo nacional e internacional.³⁸ Los entrevistados también reconocieron la participación de muchos miembros de la comunidad en la explotación y el tráfico de especies en peligro de extinción y en la tala y el comercio ilegal de madera, en los que intervienen diversos actores, desde intermediarios hasta traficantes internacionales. En la figura 2 se destacan los delitos contra el medio ambiente detectados por los entrevistados.

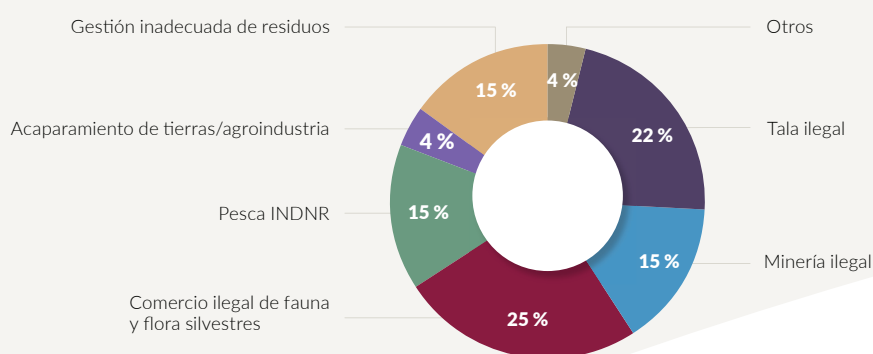


FIGURA 2 Delitos medioambientales detectados en la comunidad Chilly Urku.

Impacto de los delitos medioambientales en las mujeres

Entre las muchas y variadas repercusiones de la pérdida de biodiversidad y las industrias extractivas, la caza ilegal y la pesca INDNR han tenido un efecto directo en la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de Ecuador. Grandes mamíferos como el tapir, que se cazaba para obtener carne de animales silvestres, y algunas especies de peces están ahora en peligro de extinción, mientras que la deforestación ha reducido considerablemente la disponibilidad de plantas medicinales y árboles madereros que antes abundaban, como la caoba de hoja grande en peligro de extinción.

Los lugares sagrados ancestrales utilizados para festivales culturales han sido sustituidos por concesiones madereras y mineras. Además, como en otras partes del mundo, la minería ilegal ha contaminado con mercurio el suelo de la región y ríos como el Puyo.

Las mujeres de las sociedades amazónicas ecuatorianas son responsables de la seguridad alimenticia de su hogar, lo que las obliga a dedicarse a la agricultura de subsistencia y a la cría de ganado.³⁹ La degradación medioambiental ha afectado su trabajo diario, obligándolas a dedicar más tiempo a la búsqueda de agua potable. A medida que desaparecen las plantas medicinales, las mujeres se ven obligadas a adentrarse más en los bosques, que de hecho están dominados por los hombres, y enfrentan el riesgo de sufrir agresiones sexuales y violencia.

La menor disponibilidad de carne de animales silvestres también ha empujado a las mujeres a buscar fuentes alternativas de proteínas alimentarias. Las mujeres suelen buscar trabajo doméstico en los alrededores de los campamentos madereros y mineros, donde son vulnerables a las agresiones, la explotación sexual y los trabajos forzados. Las actividades mineras ilegales se desarrollan en gran medida en territorios criminales, que son escenarios de explotación sexual y trata de personas para trabajos forzados.

Resiliencia comunitaria

Ecuador cuenta con una serie de mecanismos institucionales para hacer frente a los delitos contra la conservación y el medio ambiente.⁴⁰ La conservación de la biodiversidad está consagrada en la Constitución del país, así como numerosas leyes, normas y procedimientos centrales y sectoriales para proteger y promover el uso sostenible de los recursos forestales, que también sancionan cualquier uso inadecuado.⁴¹ Sin embargo, la capacidad limitada, la débil gobernanza institucional y la corrupción endémica debilitan la confianza pública en las instituciones del Estado, lo que afecta a la aplicación de las políticas.⁴² Uno de los principales problemas destacados en las entrevistas fue la limitación inherente al sistema judicial ecuatoriano, en el que los jueces deben supervisar una serie de litigios (desde casos de divorcio hasta delitos contra el medio ambiente) independientemente de su experiencia, lo que diluye el vigor con el que se procesa a los autores de delitos contra el medio ambiente.

Las comunidades organizan grupos locales de vigilancia social para reforzar la gobernanza comunitaria interna, consolidar los procesos de vigilancia comunitaria y elaborar materiales de incidencia con el apoyo de organizaciones nacionales como Conservación Internacional y Naturaleza y Cultura Internacional. Organizaciones indígenas shuars como la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Nacionalidad Shuar del Ecuador y Pueblo Shuar Arutam lideran el enfrentamiento a las actividades extractivas y los delitos ambientales, especialmente la minería que degrada el medio ambiente y contamina las fuentes de agua. Organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Consejo de Administración Forestal apoyan los esfuerzos de las comunidades mediante proyectos de desarrollo que permiten el uso sostenible de los recursos forestales al tiempo que protegen los territorios indígenas. Por ejemplo, el Consejo de Administración Forestal está coordinando con el Grupo de Trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria y la Organización de la Nacionalidad Waorani de la Amazonia Ecuatoriana para fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas para que puedan establecer un mecanismo de gestión y uso sostenible de los recursos forestales.⁴³

La comunidad también está creando conciencia sobre el respeto de los límites territoriales y los recursos con las comunidades vecinas, declarando áreas protegidas y de conservación dentro de los bosques, y solicitando al Gobierno seccional que declare los territorios ancestrales libres de minería. Por ejemplo, líderes y colectivos indígenas de determinados territorios han conseguido derechos de la naturaleza, como en el caso de Sarayaku (litigio ganado contra una empresa petrolera estatal) y con el Pueblo Shuar Arutam (litigio ganado contra una empresa minera estatal). Estos casos se han llevado a tribunales internacionales para exigir que el Estado ecuatoriano reconozca los derechos de los pueblos indígenas a defender sus recursos.⁴⁴



Una mujer quichua prepara un remedio medicinal natural en su casa de Sarayaku, Ecuador. A medida que desaparecen las plantas medicinales, las mujeres se ven obligadas a adentrarse en los bosques, donde corren el riesgo de sufrir agresiones sexuales y violencia. © Franklin Jacome a través de Getty Images

Estrategias de resiliencia de las mujeres

Las mujeres amazónicas, como las sáparas, se autoorganizan para oponer resistencia colectiva a las actividades extractivas en sus tierras ancestrales. Las mujeres quichuas amazónicas, por ejemplo, han dirigido charlas sobre el impacto de la pérdida de biodiversidad, la importancia de la protección del medio ambiente y la necesidad de preservar los recursos forestales para las generaciones futuras.

El movimiento sápara, liderado por mujeres, está bien documentado y desafía las narrativas del desarrollo que caracterizan a las comunidades indígenas como «pobres» y «contrarias al desarrollo». Otros movimientos colectivos participan en protestas sociales contra la degradación medioambiental, las concesiones y todas las operaciones extractivas en sus territorios. Presentan quejas oficiales ante las instituciones estatales municipales y regionales para denunciar los delitos medioambientales cometidos en sus territorios. Las mujeres quichuas amazónicas defienden su medio ambiente, no para cuestionar los roles tradicionales de género, sino para reclamar su voz, especialmente en las *mingas* (reuniones comunitarias), donde su función ha sido tradicionalmente preparar y servir la comida (una extensión de las funciones domésticas).

Algunas mujeres shuars han ganado visibilidad dentro de la comunidad como representantes en los consejos municipales locales y en las instituciones estatales. Estas mujeres utilizan sus cargos para denunciar delitos medioambientales presentando denuncias y planteando cuestiones relacionadas en reuniones en nombre de otras mujeres y de sus comunidades. Otros colectivos de mujeres shuars están trabajando juntas para identificar medios de vida alternativos a la agricultura de subsistencia con el fin de reducir su dependencia de los recursos naturales.

Las comunidades indígenas de Ecuador, y en especial sus mujeres, llevan mucho tiempo resistiéndose a los daños medioambientales y socioeconómicos que sufren sus tierras. También se han opuesto a la adquisición de tierras y a la autorización de industrias extractivas en sus territorios. A pesar de su decidida resistencia, estas comunidades se enfrentan a crecientes peligros por parte de actores no estatales armados y su vulnerabilidad se ve agravada por los informes sobre la criminalización de sus actividades. Esta situación permite a los agresores impedir o disuadir eficazmente los esfuerzos de resistencia de las comunidades.⁴⁵

Región de la Sierra Tarahumara, México

La región de la Sierra Tarahumara (Sierra) se encuentra en el norte de la Sierra Madre Occidental de México, en el estado fronterizo de Chihuahua. Estos bosques se caracterizan por una enorme diversidad de flora y fauna tropicales, subtropicales y templadas. Gran parte de los recursos naturales de México forman parte de ejidos, un complejo sistema de tenencia de la tierra que rige el uso de la tierra fuera de los asentamientos humanos, incluidos bosques, lagos, montañas y reservas naturales que combinan la propiedad pública y privada. Durante las décadas de 1980 y 1990, los ejidatarios (personas a las que el Gobierno concede acceso a las tierras ejidales) y los agricultores aseguraron la mayor parte de la tierra para la propiedad privada.⁴⁶ Más del 90 % de los recursos naturales y la diversidad biológica de la Sierra se encuentran en tierras ejidales, donde los rarámuris (tarahumaras) y los ódames son las comunidades indígenas dominantes.⁴⁷



FIGURA 3 Localización de la Sierra Tarahumara en el estado mexicano de Chihuahua.

La presencia de grupos del crimen altamente organizado, las industrias extractivas autorizadas, la proximidad de la Sierra a la frontera con Estados Unidos y el cambio climático han intensificado la competencia por las tierras cultivables. La tala ilegal de pinos está orquestada por una red de funcionarios corruptos del Gobierno (desde el local hasta el municipal), ejidatarios, caciques y muchas familias indígenas que dependen de la industria maderera para su subsistencia, principalmente trabajando como peones.

Además de los daños medioambientales causados por las industrias extractivas autorizadas, los entrevistados responsabilizan a los grupos del crimen organizado de cultivar amapola y marihuana en tierras deforestadas. Afirman que las organizaciones criminales trabajan con mestizos para ampliar su control sobre los ejidos y obligan a ejidatarios, caciques y familias indígenas rarámuris y ódames a cultivar amapola y marihuana en sus tierras, o los presionan para que vendan o renuncien a sus derechos sobre la tierra si se niegan.

México cuenta con mecanismos institucionales para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente, incluido un mecanismo estatal de denuncia denominado PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). Sin embargo, la marginación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, la corrupción, la falta de recursos y la protección de los denunciantes afectan a su aplicación real. Además, las comunidades indígenas tienen que hacer frente a diversos intereses económicos cuando luchan por sus derechos territoriales y la protección de las zonas forestales. La figura 4 muestra los delitos contra el medio ambiente detectados por los entrevistados.

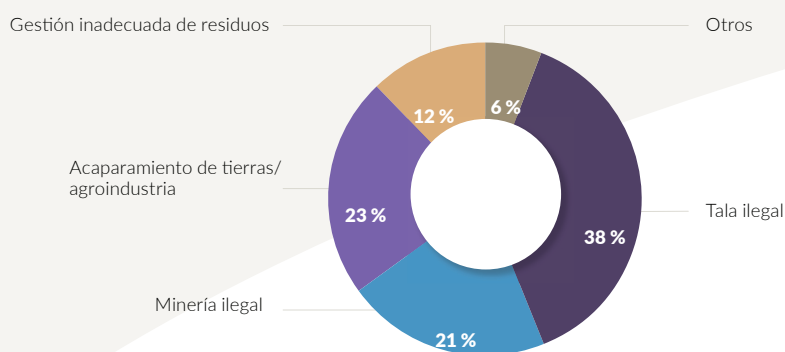


FIGURA 4 Delitos ambientales detectados en la región de la Sierra Tarahumara.

Impacto de los delitos medioambientales en las mujeres

La Sierra es una zona estigmatizada en toda América Latina como tierra de narcotraficantes. Esta estigmatización ha normalizado la violencia, el crimen organizado (incluidos los delitos contra el medio ambiente) y la impunidad de los autores. Tradicionalmente, las comunidades indígenas de la región se han dedicado a la agricultura de subsistencia.⁴⁸ Sin embargo, la rápida pérdida de tierras ha afectado su salud y sus medios de subsistencia, ha perturbado sus identidades socioculturales y ha facilitado su participación en economías delictivas.

La desnutrición como consecuencia de la tala y la minería extensivas, y la consiguiente contaminación del suelo y el agua, es una crisis de salud entre los miembros de la comunidad.⁴⁹ Los servicios de atención médica están lejos de los asentamientos indígenas, lo que aumenta la carga de las madres, que tienen que recorrer largas distancias para atender a sus familiares enfermos, a menudo bebés y niños.

Las extensas y abruptas pérdidas socioculturales y económicas han provocado profundas fricciones entre los hogares rarámuris y ódames, que se manifiestan en el aumento de las tasas de adicción al alcohol y de violencia doméstica contra las mujeres. Al igual que en Ecuador, los territorios forestales están dominados

por los hombres y plagados de actividades delictivas. Recoger leña y agua limpia se ha convertido en una ardua tarea, ya que las mujeres son cada vez más vulnerables a la violencia y las agresiones sexuales de los hombres que trabajan en las industrias extractivas legales e ilegales. Los grupos criminales que operan en la zona también explotan sexualmente a las mujeres y trafican con ellas.

Los rarámuris desplazados huyen a las ciudades en busca de refugio o trabajo. Según los informes, son discriminados y sus hijos suelen abandonar la escuela. Muchos jóvenes de la comunidad pierden la vida por la adicción a las drogas y el alcohol o encuentran su identidad en las amplias operaciones de los grupos delictivos. Las madres de estos jóvenes son estigmatizadas por sus comunidades.

Resiliencia comunitaria

México cuenta con un marco jurídico compuesto por diversas leyes estatales, una unidad de aplicación de la ley y una unidad judicial con el objetivo específico de luchar contra el crimen organizado, incluidos los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, las instituciones estatales municipales y los Gobiernos locales son corruptos y cómplices del crimen organizado.⁵⁰ La aplicación de la ley ha sido ineficaz debido a un cúmulo de factores, desde la falta de protección de testigos a la corrupción y la marginación de los derechos territoriales indígenas. Las comunidades compiten con los grupos delictivos por los derechos territoriales, lo que ha dado lugar a una cultura de impunidad para los cárteles de la droga y a una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de los delitos contra el medio ambiente.



Coloradas de la Virgen, una remota aldea indígena tarahumara en la Sierra Tarahumara. Las poblaciones indígenas del norte de México están amenazadas por la corrupción gubernamental, la represión militar, la violencia del narcotráfico y la pérdida de tierras comunales por la tala ilegal.
© Andrew Lichtenstein/Corbis a través de Getty Images

Los líderes rarámuris y ódames han organizado movimientos pacifistas para hacer frente a la pérdida de biodiversidad mediante proyectos de restauración, como la captación de agua comunitaria y la reforestación en línea con el programa estatal de plantación de árboles Sembrando Vida. Para denunciar los delitos contra el medio ambiente, recurren a organizaciones como la Consultoría Técnica Comunitaria, la Alianza Sierra Madre y el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, que les prestan asistencia jurídica para documentar los casos, interponer demandas e interactuar con las autoridades. También colaboran con organizaciones que ofrecen oportunidades de empleo temporal en proyectos destinados específicamente a empoderar a las comunidades indígenas. Además, crean mapas bordados como medio de preservar su patrimonio cultural. Organizan reuniones comunitarias para compartir experiencias y debatir problemas, prácticas óptimas y estrategias de resiliencia dentro de las comunidades.

Estrategias de resiliencia de las mujeres

Las mujeres rarámuris y ódames han colaborado con grupos de la Iglesia católica, acompañadas por líderes religiosas femeninas y sacerdotes jesuitas en Chihuahua, para hacer oír su voz. Utilizan festivales y encuentros religiosos y culturales para fomentar la unidad en la defensa de sus derechos territoriales y su patrimonio cultural. Las mujeres rarámuris de toda la Sierra se han organizado en organizaciones formales y colectivos informales para apoyar y participar en marchas de protesta y reuniones en las que comparten experiencias y debaten sobre problemas, prácticas óptimas y estrategias de resiliencia. También dialogan con funcionarios estatales y organizan la formación para dotar a las mujeres desplazadas de habilidades generadoras de ingresos, como la costura, el bordado, la artesanía, el tejido y la avicultura, para sustituir a los hombres que han huido de sus hogares como consecuencia de la violencia del crimen organizado. Estas estrategias de resiliencia han facilitado gradualmente la presencia de las mujeres rarámuris y ódames en los movimientos políticos y en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de estas estrategias, las organizaciones de narcotraficantes siguen intimidando, amenazando y asesinando a activistas indígenas y miembros de estos colectivos, incluidas mujeres. Las mujeres también son víctimas de funcionarios estatales corruptos que actúan en complicidad con los grupos delictivos.

Área clave de biodiversidad de Yabassi, Camerún

Los bosques de Yabassi de Camerún forman parte del ecosistema forestal de la cuenca del Congo. Situada en el oeste de Camerún, la zona clave de biodiversidad de Yabassi abarca 3 000 kilómetros cuadrados de bosque y próspera biodiversidad cerca de la ciudad costera de Douala. Este ecosistema forestal ha conformado las identidades indígenas, proporcionando alimentos y plantas medicinales, materias primas y materiales de construcción, y tierras cultivables para la subsistencia y la agricultura comercial de los pueblos multiétnicos de habla bantú bassa, bandem, botia, bona ba'a y beti.

Los bosques de Yabassi, al igual que otros bosques de la región, están asolados por la tala ilegal generalizada, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres. Los autores van desde funcionarios de la administración local, operadores con licencia y exportadores hasta aldeanos o miembros de la comunidad local. La porosidad de la frontera camerunesa, los conflictos regionales, la pobreza generalizada y la corrupción arraigada facilitan la extracción y el transporte ilegal de productos forestales.⁵¹

El comercio ilegal de la fauna y la flora silvestres y de la madera implica a complejas redes delictivas que forman una cadena de suministro transnacional en la que participan actores de los ecosistemas forestales y de los mercados exteriores.⁵² El aumento de la demanda nacional e internacional de madera ha provocado un incremento de la tala informal. Esto ha contribuido significativamente a la rápida y extensa deforestación de los bosques de Camerún.⁵³ La mayor parte de la madera y la fauna silvestre de origen ilegal de Camerún se trafica hacia países asiáticos, especialmente China y Vietnam, siendo Douala el centro de las transacciones financieras ilícitas en las que participan empresas chinas.

A pesar de las numerosas leyes camerunesas de protección del medio ambiente y de los sistemas comunitarios de gestión forestal, gran parte de la fauna y la flora silvestres y de los productos madereros ilegales del país proceden de zonas protegidas, zonas transfronterizas, zonas de concesión y lugares de construcción de grandes infraestructuras.⁵⁴ La explotación sin restricciones de los bosques, la tierra y el agua de Yabassi ha contaminado sus ríos, reduciendo la cantidad y variedad de peces y especies marinas. Las comunidades indígenas se enfrentan a numerosos problemas, como la pérdida de tierras territoriales y fuentes tradicionales de proteínas, así como la criminalización y la violencia, y la creciente presencia de economías ilícitas y redes delictivas. La figura 6 ilustra los distintos delitos medioambientales detectados por los entrevistados.⁵⁵

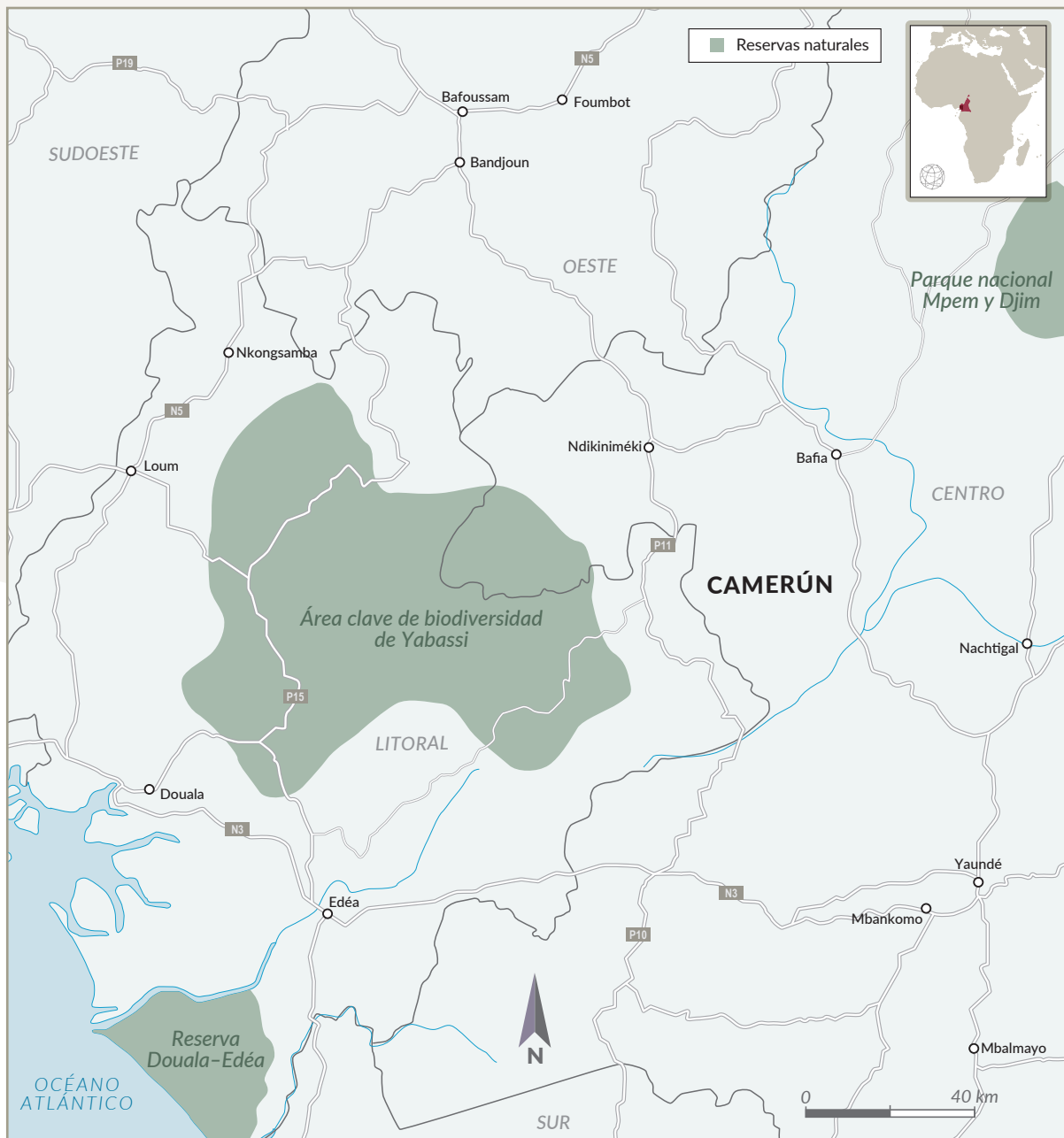


FIGURA 5 Localización del Área Clave de Biodiversidad de Yabassi en la región litoral de Camerún.

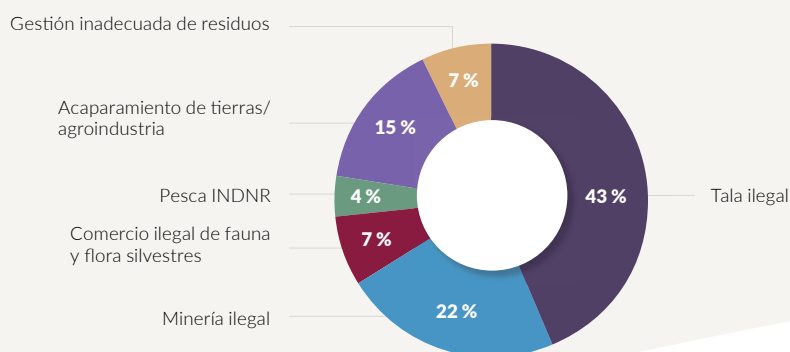


FIGURA 6 Delitos ambientales detectados en la región forestal de Yabassi.

Impacto de los delitos medioambientales en las mujeres

La deforestación del ecosistema forestal de Yabassi es grave y afecta a la supervivencia de las comunidades indígenas. La carne de animales silvestres, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de proteínas de las culturas indígenas de la región. Sin embargo, el comercio ilegal de animales salvajes y la deforestación, agravados por las necesidades de la creciente población de Camerún, han reducido la disponibilidad y aumentado el costo de la carne de animales silvestres para las comunidades indígenas. Muchos leñadores informales o ilegales traen carne de animales silvestres del bosque para que sus esposas la vendan en los mercados urbanos, mientras que otros mantienen relaciones con mujeres que dirigen restaurantes de carne de animales silvestres en Douala.⁵⁶

Además, las entrevistas pusieron de relieve que las mujeres tienen una mínima capacidad de actuación en la sociedad camerunesa, y mucho menos en las comunidades indígenas moldeadas por las industrias extractivas. Esta marginación se manifiesta en la falta de representación política en los cargos gubernamentales e incluso en las reuniones comunitarias, como explicaron algunas entrevistadas. Las mujeres no tienen acceso a los derechos sobre la tierra y dependen cada vez más de los hombres. Reflejando el patrón de adquisiciones de tierras a gran escala y la degradación de las tierras cultivables de los estudios de caso anteriores, la presión sobre las mujeres indígenas resultante de la inseguridad alimentaria las empuja a la violencia y la explotación sexual, especialmente en los campamentos mineros y madereros.

Resiliencia comunitaria

Camerún cuenta con varias leyes sobre gestión sostenible de la tierra y los recursos forestales, pero la capacidad nacional para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente sigue siendo limitada. Las instituciones públicas están plagadas de corrupción, lo que dificulta su capacidad para hacer cumplir la ley y el orden, agravada por la falta de un poder judicial independiente.⁵⁷ Esto ha debilitado los esfuerzos nacionales para hacer frente a los delitos medioambientales, lo que ha provocado una falta de confianza en las instituciones estatales municipales y en las autoridades judiciales.

Han surgido algunas iniciativas locales, aunque con un impacto limitado, sobre todo porque la población local carece de recursos financieros y de capacidad técnica y jurídica para gestionar eficazmente los recursos forestales comunitarios y reclamar justicia por delitos medioambientales. Estas iniciativas locales resilientes incluyen principalmente la reforestación de zonas devastadas, campañas de creación de conciencia contra la destrucción del medio ambiente, plantación de cultivos perennes y denuncias. Estas iniciativas también cuentan con la orientación y el apoyo de organizaciones locales. Por ejemplo, Ajemalebu Self Help apoya la vigilancia y el control de los bosques en las unidades forestales comunitarias,



Gran parte de los productos madereros ilegales de Camerún proceden de zonas protegidas. La deforestación del ecosistema forestal de Yabassi es especialmente grave y afecta a la supervivencia de las comunidades indígenas.

© Brent Stirton a través de Getty Images

ya la Action pour la Protection en Afrique des Déplacés Internes et des Migrants Environnementaux (Acción para la Protección de los Desplazados Internos y los Migrantes Medioambientales en África), ofrece orientación jurídica a las comunidades afectadas a través de su secretaría.

Estrategias de resiliencia de las mujeres

Aunque las normas de género y el patriarcado limitan la voz y la participación de las mujeres en cuestiones relacionadas con la gestión de la tierra y los bosques, las mujeres yabassi se están reagrupando en asociaciones de mujeres y grupos de iniciativa conjunta para hacer oír su voz colectiva. Además de las acciones de resiliencia comunitaria, están liderando protestas que incluyen la colocación de barricadas en la maquinaria de tala y minería, la colaboración con los hombres para crear conciencia sobre los delitos medioambientales, la presentación de denuncias ante funcionarios estatales y la realización de campañas a favor de la gestión forestal sostenible participativa. Estos actos de resiliencia suelen encontrarse con amenazas, violencia e intimidación por parte de funcionarios municipales y estatales corruptos, incluidos guardias forestales y militares, lo que obliga a las mujeres a recurrir a estrategias de no confrontación. Por ejemplo, en algunas localidades, algunas mujeres adaptan su ciclo agrícola al ritmo de las operaciones de tala cultivando cosechas de temporada y hortalizas en huertos domésticos para evitar la repetida destrucción de los campos agrícolas por el paso de la maquinaria de tala y minería. Otras han recurrido a la recolección y venta de productos forestales no leñosos (PFNL) como la pimienta negra, la avellana, el eru (*Gnetum africanum*) y el ndjansang (*Ricinodendron heudelotii*) para generar ingresos familiares. Aunque pequeños, estos actos de resiliencia están convirtiendo poco a poco a las mujeres yabassi en autónomas y permitiéndoles hacer valer sus derechos en el seno de los hogares y las asociaciones comunitarias.

Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra, Indonesia

La comunidad batak toba es indígena de las regiones boscosas del norte de Sumatra (Indonesia). Tradicionalmente, los batak tobas han dependido del ecosistema forestal para obtener agua, alimentos,



FIGURA 7 Localización del Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra en Indonesia.

medicinas, benzoína (resina de goma), madera de construcción, materiales de artesanía (bambú y ratán), vino de palma local y especias. Los bosques del norte de Sumatra están dentro del territorio consuetudinario de la comunidad batak toba, pero la comunidad no se encarga de su gestión. Reguladas por instituciones gubernamentales, las empresas de aceite de palma están adquiriendo licencias que pasan por encima de la normativa para ocupar 7.7 millones de acres para plantaciones en Indonesia, de los cuales 3.2 millones de hectáreas están en Sumatra.⁵⁸

Durante décadas, el pueblo batak toba se ha visto amenazado por el acaparamiento de tierras a gran escala, propiciado por las concesiones madereras y las plantaciones. Grandes extensiones de territorios indígenas, turberas y bosques se han convertido en monocultivos de productos agrícolas orientados a la exportación, como el aceite de palma, la madera y el eucalipto. Al parecer, las compañías multinacionales incumplen las leyes, por ejemplo en lo que respecta al despeje de tierras, lo que contribuye a los incendios forestales anuales de la región y a la niebla durante la estación seca.⁵⁹

Las actividades de extracción en los territorios indígenas en disputa afectan gravemente a la seguridad alimentaria y al cultivo y extracción de recursos económicos autóctonos como el *Styrax benzoin*. El uso excesivo de pesticidas y productos químicos en las plantaciones de monocultivos ha provocado una grave contaminación del agua y la extinción de especies de peces endémicas como el *Ikan batik* (o *ihan*). La deforestación y la contaminación acústica han desplazado a mamíferos como cerdos salvajes, elefantes y monos a zonas agrícolas cercanas a los bosques, contribuyendo al creciente problema de los conflictos entre humanos y animales.

Indonesia alberga los mayores mercados de tala ilícita del sudeste asiático, con una tala ilegal generalizada llevada a cabo por poderosos empresarios y actores extranjeros (chinos, vietnamitas y filipinos, entre otros), en connivencia con funcionarios locales corruptos.⁶⁰ La minería ilegal y la mala gestión de los residuos son otros delitos medioambientales de escala limitada en esta comunidad, como se muestra en la Figura 8.

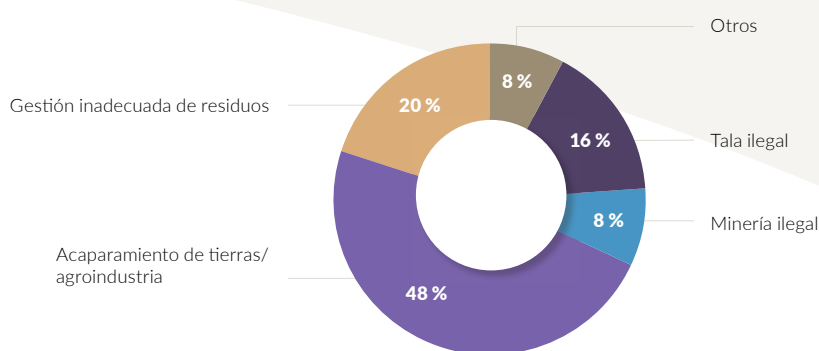


FIGURA 8 Delitos ambientales detectados en la comunidad Batak Toba.

Impacto de los delitos medioambientales en las mujeres

Las normas de género designan a las mujeres batak tobas como sostén de la familia y principales productoras de los cultivos alimentarios del hogar. Sin embargo, las mujeres tienen derechos y control limitados sobre las tierras agrícolas debido a los sistemas patriarcales de derechos de propiedad por parentesco, en virtud de los cuales se les conceden derechos de uso permisivo de las tierras familiares o comunitarias para el cultivo de alimentos (principalmente arroz) a través de parientes varones. En consecuencia, la pérdida de tierras comunitarias en favor de empresas agroindustriales y proyectos mineros afecta negativamente a las funciones de subsistencia de las mujeres, ya que quedan excluidas de cualquier plan de compensación dirigido a los propietarios de las tierras.

Además, la sustitución de los árboles de *Styrax benzoin* (el principal recurso económico de los hombres) por plantaciones de aceite de palma y eucalipto está llevando a los hombres Batak Toba a buscar ingresos alternativos como jornaleros autónomos para empresas madereras, mineras y agroindustriales. Esta imprevisible y nueva afluencia de dinero tiende a influir en las relaciones de género, aumentando la dependencia económica de las mujeres con respecto a los hombres y a veces empujando a las mujeres aún más a la marginación.

Resiliencia comunitaria

Indonesia cuenta con un marco jurídico adecuado,⁶¹ pero carece de la infraestructura necesaria para combatir eficazmente los delitos contra el medio ambiente. Aunque el Gobierno condena públicamente los delitos contra el medio ambiente, la corrupción es creciente a nivel estatal y regional, lo que socava los esfuerzos de resiliencia de las instituciones públicas de Indonesia.⁶² Frente a esto, la comunidad batak toba está utilizando diversas estrategias para proteger sus territorios ancestrales y reclamar sus derechos sobre la tierra. Buscan colectivamente el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios sobre la tierra

a través de la rama Tano Batak de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) y exigen la devolución de las tierras consuetudinarias a las empresas agroalimentarias.

También están rehabilitando zonas dañadas mediante la reforestación (con árboles frutales y benjuí), la cartografía participativa y la ordenación territorial de los territorios indígenas. También organizan concentraciones y marchas pacíficas de protesta para denunciar los delitos medioambientales. Un ejemplo destacado es la marcha pacífica de 2021 desde el pueblo de Balige hasta el Palacio Presidencial de Yakarta.

Además de estas estrategias locales de resiliencia, los miembros de la comunidad batak toba también están recabando el apoyo de organizaciones nacionales como la Asociación Batak de Indonesia, el Grupo de Estudio para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias y el instituto Hutan Rakyat Institute para crear conciencia y defender y proteger los derechos territoriales indígenas. También están creando conciencia sobre la responsabilidad social corporativa de las concesiones para con las comunidades circundantes.



En el norte de Sumatra, grandes extensiones de territorios indígenas, turberas y bosques se han convertido en monocultivos de productos agrícolas orientados a la exportación, incluido el aceite de palma. © Sutanta Aditya/NurPhoto a través de Getty Images

Estrategias de resiliencia de las mujeres

Aunque los delitos medioambientales afectan negativamente a las mujeres batak tobas, Indonesia es una nación de predominio musulmán con normas de género conformadas por una combinación de principios culturales e islámicos que imponen un comportamiento conservador y restringen los derechos y la libertad de las mujeres para participar en actividades públicas. Esto ha provocado que la mayoría de las mujeres se sientan impotentes, a pesar de que la comunidad batak toba es predominantemente cristiana. Como consecuencia, la mayoría de las mujeres solo participan en actividades de resiliencia comunitaria dentro de las normas culturales y de género aceptables, como plantar árboles en las orillas del lago Toba.

Sin embargo, unas pocas mujeres batak tobas se están atreviendo a ejercer su capacidad de acción y a utilizar su voz dentro de la comunidad para abogar por la justicia contra los autores de delitos medioambientales participando en sentadas, a veces desnudas, como conexión simbólica entre el cuerpo de la mujer y la naturaleza. Por ejemplo, en diciembre de 2021, algunas mujeres organizaron una protesta desnudas contra una empresa agroindustrial para impedir que los camiones entraran en sus tierras forestales ancestrales, ya fuera para talar árboles o para talar para plantaciones de monocultivos en tierras que habían sido arrebatadas a la comunidad.⁶³ Por un lado, estas defensoras del medio ambiente son tachadas de incivilizadas y rebeldes dentro de la comunidad, lo que las aleja de otras mujeres de la comunidad. Por otro lado, son intimidadas y agredidas por matones y militares corruptos contratados por los autores de los delitos medioambientales. Según los informes, las defensoras también han sido criminalizadas y el Estado ha invocado leyes antipornografía contra manifestantes desnudas. Estas amenazas aumentan los riesgos para la vida de las mujeres y disuaden a otras mujeres de convertirse en defensoras del medio ambiente.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los efectos de los delitos contra el medio ambiente, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afecta a las mujeres indígenas en la Amazonia ecuatoriana, la región mexicana de la Sierra Tarahumara, la selva de Yabassi en Camerún y los bosques tropicales de Sumatra en Indonesia. Los roles y las expectativas de género limitan la acción de las mujeres a las actividades domésticas, que a su vez dependen de la salud de su entorno. La mayoría de las mujeres entrevistadas en estas comunidades no estaban implicadas en delitos medioambientales, pero sufrían la masculinización de las actividades económicas relacionadas con los bosques, la pérdida de cultura y tierras, el deterioro de la salud, la violencia doméstica, la explotación sexual y el trabajo forzado.

Las mujeres indígenas de las regiones estudiadas de México y Ecuador parecen desempeñar un papel más activo en los movimientos indígenas colectivos por los derechos a la tierra, las reparaciones y la protección del medio ambiente que las de Camerún e Indonesia. La protección de los delitos medioambientales y de los derechos humanos tiende a clasificar a las comunidades indígenas de forma conjunta, pasando por alto las vulnerabilidades únicas de las mujeres debido a su dependencia económica de los hombres, reforzada por normas socioculturales y prácticas religiosas que dictan el papel de las mujeres en las comunidades y su relación con los recursos forestales. Por lo general, las voces de las mujeres permanecen silenciadas y marginadas en los procesos de toma de decisiones, ya sea en las reuniones a nivel comunitario o en las agendas nacionales.



Activistas medioambientales y guardas forestales conmemoran el Día de la Tierra en Indonesia.

© Sigit Prasetya/NurPhoto a través de Getty Images

Sin embargo, a medida que las comunidades indígenas se movilizan para defender sus territorios ancestrales contra los delitos medioambientales, nuestros hallazgos muestran que las mujeres, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de otros grupos étnicos, están alzando gradualmente la voz y colectivizando los esfuerzos para proteger el medio ambiente. Sus narrativas de resistencia también reflejan las funciones de género de proteger a sus familias, su cultura y sus medios de vida. Su motivación se basa en la experiencia directa.

Los defensores del medio ambiente, ya sean mujeres u hombres, se enfrentan a muchos riesgos. Casi todos los miembros de la comunidad eran conscientes de las amenazas, agresiones y violencia que sufren los defensores del medio ambiente en sus comunidades. Los mecanismos de denuncia no son eficaces, ya que no existe protección para los denunciantes y, en algunos casos, las denuncias se suprimen sistemáticamente.

Aunque existe una necesidad urgente de reforzar la resiliencia de las comunidades y empoderar a las mujeres defensoras del medio ambiente en las cuatro zonas estudiadas, no hay una solución única para todos los casos. Es necesario un enfoque contextualizado que tenga en cuenta las normas de género, los roles y las reglas patriarcales locales. No obstante, las siguientes recomendaciones destacan los puntos de entrada para reforzar los esfuerzos de resiliencia de la comunidad, y la resiliencia de las mujeres en particular, ante los delitos medioambientales.

Para profesionales del desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y activistas por la justicia medioambiental

- **Integrar las consideraciones de género en las intervenciones planificadas y en la incidencia de las cuestiones medioambientales.** Aumentar la participación de las mujeres mediante consultas y espacios de diálogo exclusivos para mujeres sobre la gestión medioambiental. Ampliar las redes de mujeres, también en el ámbito jurídico, lo que puede implicar a instituciones dispuestas a trabajar gratuitamente. A medida que las operaciones extractivas han llevado a más hombres no locales a los territorios indígenas y rurales, ha aumentado el riesgo de violencia física para las mujeres, lo que convierte a las redes locales en una estructura de apoyo clave. El objetivo es apoyar la acción individual y colectiva de las mujeres para proteger el medio ambiente y denunciar los delitos medioambientales.
- **Ampliar la capacidad económica de las mujeres.** Las mujeres desempeñan una función fundamental en las actividades económicas agrícolas, pero están marginadas en los procesos de toma de decisiones. Su capacidad de acción puede incrementarse mediante talleres educativos y programas de capacitación económica como la microfinanciación, la formación vocacional y el desarrollo de habilidades. Además, hay que apoyar el acceso de las mujeres a mercados más amplios para sus productos, como los PFNL, en las zonas urbanas. Proporcionar acceso a cuentas bancarias individuales y planificación financiera. Animar a las mujeres a autoorganizarse para emprender acciones colectivas con el fin de hacer valer sus derechos.
- **Facilitar campañas por los derechos de las mujeres a escala comunitaria, regional y nacional.** Fomentar la solidaridad entre movimientos de base dirigidos por mujeres. Las intervenciones deben incluir el desarrollo de capacidades y la creación de conciencia sobre cuestiones relevantes, como el impacto en la salud de las mujeres de los delitos y la degradación medioambientales, la violencia doméstica y las trampas de la trata disfrazadas, por ejemplo, de falsas promesas de los enamorados y falsas ofertas de trabajo. Promover las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres o centradas en ellas y realizar talleres para facilitar un conocimiento más profundo de sus derechos y del acceso a los servicios. Deben documentarse y difundirse los casos de éxito y las prácticas óptimas.

- **Crear coaliciones con otros movimientos y organizaciones sociales.** Las organizaciones de la sociedad civil suelen trabajar en silos cuando las cuestiones que abordan convergen, como la intersección entre los derechos medioambientales y los derechos de la mujer. Iniciar coaliciones y la convergencia de cuestiones sociales de diferentes organizaciones de primera línea de la sociedad civil para crear solidaridad sobre los impactos de género de las cuestiones medioambientales, incluidos los impactos diferenciales sobre la salud, la denuncia de delitos medioambientales y el acceso a ayudas externas. Sensibilizar e implicar a los periodistas en las campañas de incidencia.
- **Crear conciencia en los jóvenes sobre los derechos de la mujer y las cuestiones medioambientales.** Los niños y los jóvenes deben llevar a sus comunidades el mensaje del rol empoderador de las mujeres en el mantenimiento de sus hogares. Esto puede hacerse mediante cambios en los planes de estudio de los centros de educación formal y mediante campañas multimedia a través de las redes sociales, la televisión y la radio. Además, los niños y los jóvenes deben comprender cómo afecta la actividad humana al medio ambiente.
- **Crear o fortalecer observatorios y grupos de vigilancia de la sociedad civil.** Estos esfuerzos pueden dirigirse a prevenir la explotación ilegal de recursos naturales en territorios indígenas, la incursión de grupos criminales y a defender la integridad de las comunidades y sus mujeres. Esto también ayudaría a reforzar la supervisión de la aplicación de las políticas a nivel comunitario.

Para Gobiernos, instituciones estatales y autoridades responsables

- **Mejorar la seguridad y la protección de las defensoras del medio ambiente.** Las defensoras del medio ambiente se enfrentan a retos diferentes a los de sus homólogos masculinos. Las estructuras patriarcales facilitan la percepción de que las mujeres son objetivos fáciles y con frecuencia pueden ser intimidadas o amenazadas. Reforzar la capacidad de los Gobiernos locales y regionales para vigilar y perseguir los delitos medioambientales, y proteger a las defensoras del medio ambiente que denuncian estos delitos de las amenazas y la violencia a las que se enfrentan.
- **Ampliar la definición de «delitos medioambientales».** La legislación nacional debe ampliar la definición de «delitos medioambientales» para incluir todas las actividades que provoquen una destrucción continuada del medio ambiente, incluidos el vertido de residuos y el desbroce de tierras, y para incluir el consentimiento informado de las poblaciones indígenas y locales. Reforzar las medidas de rendición de cuentas y los mecanismos independientes de supervisión.
- **Utilizar un enfoque interseccional para comprender las realidades ocultas que encierran los roles y las relaciones de género.** Las cuestiones medioambientales se plantean sobre todo a nivel de base, y es importante que los legisladores y las autoridades responsables comprendan e integren la interseccionalidad de las múltiples condiciones que crean vulnerabilidades más profundas para las mujeres y sus comunidades. Las cuestiones medioambientales deben abordarse desde una perspectiva de género para que su aplicación sea eficaz. Los programas públicos y las ayudas relacionadas con la gestión medioambiental deben implicar conscientemente a las mujeres líderes o a los colectivos de mujeres.
- **Evitar respuestas militarizadas a los delitos y conflictos medioambientales.** Las respuestas militarizadas aumentan exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres. Estos enfoques no solo aumentan el número de hombres en sus territorios, sino que, cuando son desplazadas internas, las mujeres se ven sometidas a trabajos forzados, violencia sexual y falta de acceso a la atención médica.

- **Hacer frente a los delitos contra el medio ambiente mediante la aplicación de la ley y una gobernanza eficaz.** Aumentar la capacidad de las fuerzas de seguridad y del poder judicial para perseguir los delitos medioambientales. Facilitar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente mediante la creación de unidades judiciales y la capacitación de funcionarios estatales dedicados a la protección del medio ambiente. Esto también podría ayudar a las comunidades a recuperar la confianza en las instituciones estatales y capacitarlas para buscar justicia.
- **Promover la creación y gestión autónoma de diversas actividades generadoras de ingresos.** Utilizando un enfoque sensible a las cuestiones de género, los Gobiernos y los responsables políticos deberían identificar y promover fuentes alternativas de ingresos y formar a las comunidades indígenas en prácticas sostenibles relacionadas con el comercio de productos forestales.

Para investigadores y estudiosos

- **Recopilar datos desglosados por género sobre delitos medioambientales, impactos y respuestas.** Estos datos son esenciales para que la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales diseñen y apliquen políticas eficaces, especialmente contra los delitos medioambientales. La falta de estadísticas desglosadas por género sobre delitos medioambientales, incluida la participación de las mujeres y cómo se ven afectadas, se hizo evidente durante la investigación llevada a cabo para este documento.
- **Destacar la importancia de la interseccionalidad.** La importancia de la interseccionalidad no puede exagerarse. Si bien el discurso mundial hace hincapié en la importancia de la interseccionalidad para promover la integración de la perspectiva de género en los marcos y políticas medioambientales, su aplicación aún no ha reflejado las realidades de las mujeres locales, que están inextricablemente vinculadas a su entorno.



REFERENCIAS

- 1 Livia Wagner, El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina, GI-TOC, abril de 2016, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Miner%C3%ADa-Ilegal-de-Oro-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>.
- 2 El Fondo Resiliencia es el mecanismo de concesión de ayudas de GI-TOC que identifica, capacita y protege a los actores comunitarios y sus esfuerzos en las partes del mundo más afectadas por la violencia y la gobernanza criminal. El Fondo proporciona a iniciativas individuales y colectivas los medios financieros, la capacidad y las herramientas de desarrollo de habilidades para crear redes de resiliencia y buscar enfoques innovadores para la seguridad ciudadana y la consolidación de la paz. Véase <https://resiliencefund.globalinitiative.net> para obtener más información.
- 3 Organización Internacional del Trabajo, Análisis y eliminación de las barreras a la participación y la organización de las mujeres indígenas. Estudio basado en investigaciones cualitativas realizadas en Bangladesh, Estado Plurinacional de Bolivia, Camerún y Guatemala, 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_779270.pdf
- 4 Lucia Bird, *Rethinking resilience: The role of women in community responses to organized crime*, GI-TOC, mayo de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/resilience-women-organized-crime>.
- 5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Incorporación de la perspectiva de género en proyectos y programas en materia de crimen organizado y tráfico ilícito, enero de 2020, https://www.unodc.org/documents/Gender/FINLAV2005711_Spanish_Organised_Crime_rev.pdf
- 6 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica. Proyecto de decisión presentado por la Presidencia, 18 de diciembre de 2022, <https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/cop-15-l-25-es.pdf>.
- 7 Fondo Mundial para la Naturaleza, Informe Planeta Vivo 2022. Hacia una sociedad con la naturaleza en positivo, 2022, https://wwfpr.awsassets.panda.org/downloads/descarga_informe_planeta_vivo_2022_1_1.pdf.
- 8 Claire Brader, COP15: Marco global para la biodiversidad, Parlamento británico, 6 de enero de 2023, <https://lordslibrary.parliament.uk/cop15-global-biodiversity-framework>.
- 9 Ibid.
- 10 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, Plan de Acción sobre Género. Proyecto de decisión presentado por la presidenta del Grupo de Trabajo I, 18 de diciembre de 2022, <https://www.cbd.int/doc/c/5050/c9ac/3a959cb21b4e2be2321cca39/cop-15-l-24-es.docx>.
- 11 ONU-Mujeres, Artículo explicativo: Cómo la desigualdad de género y el cambio climático están relacionados entre sí, 28 de febrero de 2022, <https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si>; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, *Differentiated impacts of climate change on women and men; the integration of gender considerations in climate policies, plans and actions; and progress in enhancing gender balance in national climate delegations, 12 de junio de 2019*, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_inf8.pdf; Senay Habtezion, *Overview of linkages between gender and climate change*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP%20Linkages%20Gender%20and%20CC%20Policy%20Brief%201-WEB.pdf>; Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, *Report on the Asia-Pacific regional consultation on the priority theme of the sixty-sixth session of the Commission on the Status of Women*, 9-10 de febrero de 2022, https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/CSW66_AP_Regional_Consultation_Report_final_0.pdf; Itzá Castañeda Carney et al, *Gender-based violence and environment linkages*, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2022.
- 12 Oficina de Derechos Humanos de la ONU, El cambio climático agrava la violencia contra las mujeres y las niñas, 12 de julio de 2022, <https://www.ohchr.org/es/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-and-girls>.

- 13 Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿Por qué aumenta la vulnerabilidad a la trata en situaciones de desastre?, <https://rosanjose.iom.int/es/blogs/por-que-aumenta-la-vulnerabilidad-la-trata-en-situaciones-de-desastre>.
- 14 Oficina de Derechos Humanos de la ONU, El cambio climático agrava la violencia contra las mujeres y las niñas, 12 de julio de 2022, <https://www.ohchr.org/es/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-and-girls>
- 15 Livia Wagner, El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina, GI-TOC, abril de 2016, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Miner%C3%ADa-Ilegal-de-Oro-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>.
- 16 Daan P van Uhm y Rick CC Nijman, *The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum*, *European Journal of Criminology* 19, 4 (2022), págs. 542-561.
- 17 Ibid.
- 18 Meg Parsons, Karen Fisher y Roa Petra Crease, *Environmental justice and indigenous environmental justice, Decolonising Blue Spaces in the Anthropocene*, Londres: Palgrave Macmillan, 2021.
- 19 Matt Finer, Clinton N Jenkins, Melissa A Blue Sky y Justin Pine, *Logging concessions enable illegal logging crisis in the Peruvian Amazon*, *Scientific Reports*, 4 (2014), artículo 4719.
- 20 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, *Environmental courts and tribunals: A guide for policymakers*, 2016, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10001/environmental-courts-tribunals.pdf>.
- 21 Rob White, *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-global Criminology*, Londres: Routledge, 2017.
- 22 Ibid.
- 23 RK Pachauri y LA Meyer et al, Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2015, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
- 24 Maia Sieverding, *Gender and reproductive health*, *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Oxford: Pergamon, 2001.
- 25 Rosemarie Tong, *Gender roles*, *Encyclopedia of Applied Ethics* (segunda edición), Amsterdam: Elsevier Science, 2011.
- 26 Ibid.
- 27 Patricia Howard (ed), *Women and Plants: Gender Relations in Biodiversity Management and Conservation*, Londres: Zed Books, 2003.
- 28 Análisis de cuestionarios semiestructurados y entrevistas con 36 mujeres y 36 hombres de la región de la Sierra Tarahumara de México, la comunidad chilly urku de Ecuador, la comunidad batak toba de Indonesia y los bosques Yabassi de Camerún, junio de 2023.
- 29 Ibid.
- 30 Ibid.
- 31 Ivette Vallejo, Cristina Cielo y Fernando García, *Ethnicity, gender, and oil: Comparative dynamics in the Ecuadorian Amazon*, *Latin American Perspectives*, 46, 2 (2019), págs. 182-198.
- 32 Análisis de cuestionarios semiestructurados y entrevistas con 36 mujeres y 36 hombres de la región de la Sierra Tarahumara de México, la comunidad chilly urku de Ecuador, la comunidad batak toba de Indonesia y los bosques Yabassi de Camerún, junio de 2023.
- 33 Ibid.
- 34 Ivette Vallejo, Cristina Cielo y Fernando García, *Ethnicity, gender, and oil: Comparative dynamics in the Ecuadorian Amazon*, *Latin American Perspectives*, 46, 2 (2019), págs. 182-198.
- 35 Ajas es un sistema agrícola agroforestal dirigido por mujeres para el suministro de alimentos a las familias y la generación de ingresos.
- 36 Ivette Vallejo, Cristina Cielo y Fernando García, *Ethnicity, gender, and oil: Comparative dynamics in the Ecuadorian Amazon*, *Latin American Perspectives*, 46, 2 (2019), págs. 182-198.
- 37 Ibid.
- 38 Entrevista con un informante clave, Ecuador, junio de 2023.
- 39 Ivette Vallejo, Cristina Cielo y Fernando García, *Ethnicity, gender, and oil: Comparative dynamics in the Ecuadorian Amazon*, *Latin American Perspectives*, 46, 2 (2019), págs. 182-198.
- 40 Ecuador tiene una puntuación de resiliencia relativamente alta de 4.88 frente al crimen organizado, incluidos los delitos contra el medio ambiente, por debajo del 5.70 de 2021. Las puntuaciones de resiliencia se puntúan sobre 10, siendo 10 la resiliencia más alta. Véase GI-TOC, Ecuador, Índice global de crimen organizado 2023, https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_ecuador_2023.pdf.
- 41 Artículos 313 y 404 de la Constitución ecuatoriana.
- 42 GI-TOC, Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net>.
- 43 Entrevista con un informante clave chilly urku, Ecuador, 20 de junio de 2023.
- 44 Ibid.
- 45 Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, *Rights defenders under threat in Ecuador: How government support is inefficient and favours industry interests*, Junio de 2021, <https://amazonfrontlines.org/m3di4/2021-06-rights-defenders-under-threat-in-ecuador.pdf>.
- 46 Melissa Schumacher et al, *Evolution and collapse of ejidos in Mexico—to what extent is communal land used for urban development?*, *Land*, 8, 10 (2019), pág. 146.

- 47 Serge LaRochelle, *Common property and traditional ecological knowledge: Biodiversity conservation in the Sierra Tarahumara, Mexico*, Masters dissertation, University of Manitoba, 2003.
- 48 Entrevistas de estudio de caso; Daniel Weisz Argomedo, *Climate change, drug traffickers and La Sierra Tarahumara*, *Journal of Strategic Security*, 13, 4 (2020), págs. 81-95.
- 49 Daniel Weisz Argomedo, *Climate change, drug traffickers and La Sierra Tarahumara*, *Journal of Strategic Security*, 13, 4 (2020), págs. 81-95.
- 50 México tiene una puntuación de resiliencia baja de 4.21 frente al crimen organizado, incluidos los delitos contra el medio ambiente, por debajo del 4.46 de 2021. Las puntuaciones de resiliencia se puntúan sobre 10, siendo 10 la resiliencia más alta. Véase GI-TOC, México, Índice global de crimen organizado 2023, https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_mexico_2023.pdf.
- 51 Camerún tiene una puntuación elevada de criminalidad de 7.50 en delitos contra la flora, la fauna y los recursos no renovables. Las puntuaciones de criminalidad se puntúan sobre 10, siendo 10 la criminalidad más alta. Véase GI-TOC, Camerún, Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/country/cameroon>.
- 52 Samuel Assembe-Mvondo y Ayami Kan, *An overview of interactions between wildlife and forest illegalities in Cameroon*, *International Forestry Review*, 24, 4 (2022).
- 53 Ibid.
- 54 Ibid.
- 55 Indígenas que son destacados funcionarios gubernamentales o empresarios que residen fuera de la aldea.
- 56 Samuel Assembe-Mvondo y Ayami Kan, *An overview of interactions between wildlife and forest illegalities in Cameroon*, *International Forestry Review*, 24, 4 (2022).
- 57 Cameroon tiene una puntuación de resiliencia baja de 3.17 frente al crimen organizado, incluidos los delitos contra el medio ambiente, ligeramente superior al 3.13 de 2021. Las puntuaciones de resiliencia se puntúan sobre 10, siendo 10 la resiliencia más alta. Véase GI-TOC, Camerún, Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/country/cameroon>.
- 58 Jaka Hendra Baittri, *Tensions boil in Sumatra over a palm oil promise villagers say has yet to be kept*, 9 de noviembre de 2022, Mongabay, <https://news.mongabay.com/2022/11/tensions-boil-in-sumatra-over-a-palm-oil-promise-villagers-say-has-yet-to-be-kept/>; *The Jakarta Globe: Indonesia's forest communities victims of 'legal land grabs'*, 19 de noviembre de 2013, Rights and Resources, <https://rightsandresources.org/blog/the-jakarta-globe-indonesias-forest-communities-victims-of-legal-land-grabs>.
- 59 Syahrul Akmal Latif y Abdul Munir, *Smog and environmental crime: Reflected from cases in Riau*, *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research*, 163 (2017), págs. 269-272.
- 60 Indonesia tiene una puntuación elevada de criminalidad de 8.0 en delitos contra la flora y la fauna. Las puntuaciones de criminalidad se puntúan sobre 10, siendo 10 la criminalidad más alta. Véase GI-TOC, Indonesia, Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/country/indonesia>.
- 61 Ley n.º 41 de 1999 sobre silvicultura, Ley n.º 18/2013 sobre prevención y erradicación de la destrucción forestal, Ley n.º 5 de 1990 sobre conservación de los recursos naturales y el ecosistema.
- 62 Indonesia tiene una puntuación de resiliencia baja de 4.25 frente al crimen organizado, incluidos los delitos contra el medio ambiente, por debajo del 4.33 de 2021. Las puntuaciones de resiliencia se puntúan sobre 10, siendo 10 la resiliencia más alta. Véase GI-TOC, Indonesia, Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/country/indonesia>.
- 63 SE Jarnalis, *Viral, aksi ibu-ibu demo tanpa busana di Toba Samosir, protes masalah lahan*, *Wajah Bangsa News*, 3 de diciembre de 2021, <https://wajahbangsanews.com/2021/12/03/viral-aksi-ibu-ibu-demo-tanpa-busana-di-toba-samosir-protes-masalah-lahan/amp>.



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 600 expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net



**RESILIENCE
FUND**
Supporting community
responses to organized crime

Con el apoyo de



**UK International
Development**

Partnership | Progress | Prosperity